

SISTEMA CENTROAMERICANO DE ÁREAS PROTEGIDAS (SICAP)

UN ENTORNO PARA CONSERVAR LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Informe Regional 2003: Avance en el cumplimiento
del Convenio sobre la Diversidad Biológica

Guatemala, Febrero 2003

Nota Introductoria

Para la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) ha sido un reto poder presentar una visión conjunta del estado de avance en la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, una visión construida con y desde los países. De este valioso ejercicio se destacan dos aspectos: en primer lugar; construir un informe regional consolidado que contribuya al avance en el proceso de integración regional y al fortalecimiento de sus instancias técnicas; en segundo lugar; presentar los progresos en una iniciativa como es el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), un modelo piloto de gestión ambiental e integración regional.

Este informe regional fue elaborado con base en los informes temáticos nacionales formulados por cada uno de los siete países de Centroamérica: Belice, Guatemala Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Dichos reportes se presentaron en cumplimiento de la decisión VI/25 sobre informes nacionales, adoptado en el marco de la VI Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), como preparativo para la Séptima Conferencia de las Partes (COP VII) en febrero del 2004.

Los informes nacionales fueron elaborados en forma participativa, con la colaboración de una amplia gama de instituciones y personas en cada país. La coordinación y responsabilidad técnica estuvo a cargo de los Puntos Focales Nacionales de Biodiversidad y de las instituciones contrapartes del Convenio.

Para una mejor comprensión, este documento está dividido en tres secciones. En la primera se presenta el contexto geográfico, institucional y de integración. En la segunda se analizan y documentan las respuestas de los países con base en una propuesta metodológica que sintetiza los temas abordados, el reporte nacional y la valoración regional sobre cada uno. Finalmente, la tercera sección presenta una valoración regional armonizada y un análisis de los resultados, planteando una serie de retos futuros, tanto regionales como temáticos.

Conscientes de la importancia estratégica de estar ubicados en una región mega diversa y de acuerdo con los resultados y compromisos derivados de esta Conferencia de las Partes, se espera continuar fortaleciendo los acuerdos que la región centroamericana ha asumido en materia de conservación de la biodiversidad, de vital importancia para el futuro de sus habitantes y del planeta en general.

El equipo responsable

PUNTOS FOCALES

Guatemala
Noé Ventura, Consejo Nacional de Áreas
Protegidas, Presidencia de la República
(CONAP).

Belice
Oswaldo Sabido, Ministry of Natural
Resources, the Environment, Commerce and
Industry.

Honduras
Elda Maldonado, Secretaría de Recursos
Naturales y Ambiente (SERNA).

El Salvador
Jorge Quezada, Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Nicaragua
Carlos Rivas Leclair, María Fernanda
Sánchez, Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA).

Costa Rica
Lesbia Sevilla, Ministerio del Ambiente y
Energía (MINAE).

Panamá
Marisol Dimas, Autoridad Nacional del
Ambiente (ANAM).

EQUIPO REDACTOR

Ronald McCarthy, Oficina Regional para
Mesoamérica, Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN/ORMA).

Danilo Saravia, Oficina Regional Proyecto
para la Consolidación del Corredor Biológico
Mesoamericano (PCCBM).

Francisco de León, Lemuel Valle, Consejo
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP),
Presidencia de la República, Guatemala.

María Fernanda Sánchez, Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA), Nicaragua

COLABORADORES

Alberto Salas, Oficina Regional para
Mesoamérica, Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN/ORMA).

Lorenzo Cardenal, Proyecto para la
Consolidación del Corredor Biológico
Mesoamericano (PCCBM).

Bayardo Quintero, Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales MARENA, Nicaragua.

Edición: Sandra Ramírez
Traducción: Abbie Fields

AUSPICIADORES

Proyecto para la Consolidación del Corredor
Biológico Mesoamericano de la CCAD.

Oficina Regional para Mesoamérica, Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN/ORMA).

Presentación

La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) tiene el agrado de presentar a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) el Segundo Informe Regional ante la Conferencia de las Partes (COP). Con este documento se renueva el compromiso de los países centroamericanos por trabajar de manera conjunta en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y se ratifica la voluntad de profundizar un proceso de integración regional, que nos permite presentarnos con una sola voz y una sola posición ante los temas de discusión de este importante foro.

Esta integración regional se produce en un contexto muy particular; un territorio en donde convergen migraciones de especies del Neártico y del Neotrópico (Norte y Sudamérica), donde se albergan miles de especies de flora y fauna, así como una variedad de ecosistemas y paisajes: desde ecosistemas semidesérticos, tierras bajas y húmedas de alta precipitación, hasta bosques nubosos de altura. Esto constituye una impresionante riqueza natural y un potencial para la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

Centroamérica es también uno de los territorios más jóvenes de América. Su formación volcánica en la Vertiente Pacífico y aluvial en la parte Caribe, sumado a su característica de ser un istmo, la han configurado como un verdadero puente biológico que cumple una función ecológica de gran importancia a escala mundial.

En ese marco, los países de la región han venido desarrollando esfuerzos para proteger y conservar aquellos espacios naturales que representan muestras únicas o singulares de ecosistemas o áreas silvestres. Los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas y del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP) se han constituido en una oportunidad, y, a la vez, en una herramienta para conservar su rica diversidad biológica.

Sin embargo, la difícil situación socioeconómica que enfrentan estas siete naciones trae consigo una serie de amenazas, que ponen en peligro la estabilidad y permanencia de estos ecosistemas, importante base material para alcanzar un desarrollo humano sostenible en la región.

Estas amenazas deben ser enfrentadas de manera conjunta. Los países de la región compartimos espacios y ecosistemas naturales, formas culturales, grupos étnicos diversos y raíces históricas que nos hacen estar “naturalmente unidos”. Por ello, las soluciones a estos problemas deben surgir de un abordaje y una visión compartida del futuro deseado.

Precisamente, el presente informe es producto de un esfuerzo común entre los países de la región y sus instancias técnicas de coordinación. Ha sido elaborado tomando en cuenta los informes nacionales de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con la asesoría del Comité Técnico de Biodiversidad (CTBio) y del Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas (CCAP), y el acompañamiento de algunas organizaciones regionales.

Esperamos que este Informe Regional de Centroamérica constituya un valioso insumo de cara a las trascendentales decisiones que se adoptarán en esta nueva Conferencia de las Partes.

Lic. Juan Mario Dary Fuentes
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala
Presidente *Protempore* Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD)

El escenario de este informe: Centroamérica un puente biológico entre las Américas

Contexto geográfico

El reciente origen geológico de la región centroamericana, su ubicación y su singular forma de istmo le han permitido jugar un importante papel en el hemisferio, como puente geográfico que conecta las masas continentales del norte y del sur de América. En medio de dos grandes océanos, se constituye en un puente biológico en donde convergen migraciones de la biota neártica con la neotropical. Su geomorfología está determinada por un corredor volcánico en la vertiente Pacífica y por llanuras aluviales hacia la vertiente del Caribe, factores todos que han propiciado una riqueza en biodiversidad que abarca unos 206 ecosistemas y más de 300 formas de paisaje (ver mapa de ecosistemas).

Los siete países de Centroamérica ocupan apenas un 0.51% del territorio emergido del planeta, pero en esta región se concentra alrededor del 9% de la riqueza biológica del mundo.

Como si esto fuera poco, América Central es además un puente cultural, lugar de encuentro entre las culturas maya-náhuatl y macro chibcha.

Mesoamérica posee la segunda barrera coralina más importante del mundo, cuya longitud alcanza los 1600 kilómetros a lo largo de las costas de México, Belice, Guatemala, y Honduras. Esta es apenas una muestra del mosaico de ecosistemas naturales que se encuentran en la región y que van desde arrecifes coralinos y bosques húmedos tropicales bajos, hasta sabanas de pino, tierras leñosas semiáridas, praderas y bosques montanos.

En un inconfundible ambiente tropical, Centroamérica también presenta gran diversidad de especies, climas y suelos en relieves; desde la plataforma submarina hasta los 5000 metros de altura sobre el nivel del mar; todo lo cual configura aproximadamente 33 ecoregiones distintas (Dinerstein 1995).

Pese a este escenario de gran belleza y riqueza natural, los países centroamericanos enfrentan serios problemas derivados de los altos niveles de pobreza y extrema pobreza en que vive una gran parte de sus habitantes. La tasa de crecimiento poblacional está por arriba del 2%. Este rápido crecimiento demográfico y los altos niveles de pobreza, combinados con la continua dependencia de la agricultura y de los recursos naturales, así como el avance de la frontera agrícola ha dado lugar a la explotación insostenible de los recursos, la contaminación de las aguas, la erosión del suelo, la sedimentación y la deforestación.

Para mediados de los años noventa se estimaba que la región estaba perdiendo anualmente el 2.1% de sus bosques, una de las tasas más altas de deforestación en el mundo. La escala y ritmo de la pérdida y fragmentación de hábitat, en una de las áreas biológicamente más ricas del mundo, ha llevado a muchos especialistas a considerar que Centroamérica es uno de los "sitios críticos" del planeta en materia de biodiversidad.

Frente a esta realidad, los países han conformado sus sistemas nacionales de áreas protegidas, han elaborado sus estrategias de biodiversidad y han aplicado acciones para mitigar estos problemas, procurando conocer, conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad. En este marco, uno de los principales logros es el trabajo conjunto que se viene desarrollando dentro del proceso de integración regional, el que abarca aspectos ambientales, políticos, sociales y económicos.

Contexto de la integración regional

Desde hace más de tres décadas, se han venido desarrollando en la región diversas iniciativas de integración. Ejemplos de este proceso han sido el Mercado Común Centroamericano y los esfuerzos para fortalecer el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); entre otros.

Es a partir de 1989, tras los Acuerdos de Paz de Esquipulas II, cuando los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua firmaron el Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), “*conscientes de la necesidad de establecer mecanismos regionales de cooperación para la utilización racional de los recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico*”. Posteriormente, se incorporan al proceso de integración Belice y Panamá. México y República Dominicana son observadores en la parte ambiental.

La CCAD es un órgano del SICA, cuya misión es fortalecer la integración regional en materia ambiental, con el fin de impulsar su desarrollo por la senda de la sostenibilidad económica, social y ecológica. Para ello, la CCAD actúa regionalmente procurando armonizar las políticas y sistemas de gestión ambiental y promoviendo posiciones comunes y concertadas ante los foros extraregionales y mundiales.

Dentro de la estructura de gestión de la CCAD la más alta autoridad es el Consejo de Ministros, integrado por las autoridades de ambiente y recursos naturales de los siete países miembros. Su función es definir las políticas generales y establecer el plan estratégico que dirige la labor de la Comisión.

Una Presidencia *Protempore*, que rota cada seis meses entre los países miembros, asume la responsabilidad de representar a la Comisión, convocar a reuniones y delegar en la Secretaría Ejecutiva las funciones que considere convenientes.

Adicionalmente, tanto la Presidencia de la CCAD como el Consejo de Ministros en pleno, cuentan con comités técnicos para asesorarse en temas ambientales específicos. Dichos comités son coordinados por la Secretaría Ejecutiva e integrados por funcionarios nombrados por las autoridades de ambiente y recursos naturales de cada país miembro. Dos de estos equipos asesores son el Comité Técnico de Biodiversidad (CTBio) y el Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas (CCAP).

A la Secretaría Ejecutiva corresponde, además, las tareas gerenciales para ejecutar las decisiones del Consejo de Ministros, planificar, administrar, dar seguimiento a los proyectos regionales y a la actividad general de la Comisión, así como gestionar la cooperación internacional.

Todo este accionar le permite a la CCAD incidir políticamente, generar sinergias, lograr economías de escala y superar asimetrías; actuando como un catalizador, facilitador, armonizador e integrador de las políticas ambientales de la región, aspectos que no serían posibles mediante acciones solo nacionales.

Los lineamientos estratégicos de la CCAD se encuentran especificados en el Plan Ambiental de la Región Centroamericana (PARCA), una estrategia de mediano y largo plazo que aborda directamente los retos ambientales de la región a través de tres ejes: biodiversidad y bosques, agua, y, producción y gestión ambiental.

Cada uno de estos ejes tiene como fundamento político la generación de un cambio de actitudes hacia el uso de recursos naturales, promover la participación de la mujer, reducir la vulnerabilidad social y ecológica, descentralizar la gestión ambiental, fomentar la participación y la equidad social; todo enfocado a lograr un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de la región centroamericana.

Entre los esfuerzos conjuntos conducidos bajos estos principios, se destacan el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, vigente desde 1992 (concretado antes que el Convenio sobre la Diversidad Biológica) y la formulación de la Estrategia Mesoamericana de Biodiversidad en el año 2003.

El Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP), derivado del Convenio de Biodiversidad, es una de las iniciativas de integración ambiental más consolidadas en la región y se ha desarrollado como el conjunto de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (SINAP). En la actualidad, está conformado por 557 áreas protegidas establecidas legalmente, que constituyen alrededor del 25% del territorio centroamericano.

Contexto institucional y legal

Los SINAP han sido definidos bajo diferentes estructuras institucionales y distintos marcos legales y de políticas. Esto expresa indiscutiblemente las asimetrías existentes entre los países y genera diferencias en sus mecanismos de operación. Es importante tener claridad sobre este marco institucional, para comprender mejor los aspectos que se presentan en la gestión de las áreas protegidas de cada país.

En general, son los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales los encargados de la gestión de las áreas protegidas. Sin embargo, las asimetrías, antes mencionadas, tienen una expresión concreta en los arreglos institucionales, e incluso en la denominación de los tipos y categorías de áreas protegidas.

En el caso de Belice, las Áreas Protegidas (ASP) son administradas por tres ministerios diferentes: el de Recursos Naturales, Ambiente y Comercio e Industria, que a través del Departamento Forestal se encarga de las ASP terrestres; el de Pesca, Agricultura y Cooperativas que a través del Departamento de Pesca se encarga de las marinas; y el de Turismo, Cultura y Comunicación, que administra los sitios arqueológicos por medio del Departamento de Arqueología.

En Guatemala, existe un órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), que es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) que depende directamente de la Presidencia de la República. El Consejo está presidido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

En Honduras, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) es la encargada de coordinar y evaluar las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, la protección de la flora y fauna, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Parques Nacionales y su coordinación superior. Sin embargo, la ejecución de dichas normas y políticas es responsabilidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con apoyo de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), bajo la Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS).

En El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la responsabilidad de la administración de las áreas protegidas recae en una sola institución, que se encarga de normar y administrar dichos espacios naturales y culturales.

En El Salvador es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que cuenta con la Dirección de Patrimonio Natural; en Nicaragua es el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), a través de la Dirección General de Áreas Protegidas; en Costa Rica es el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); y en Panamá es la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), a través de la Dirección de Patrimonio Natural.

La metodología de este informe: un abordaje conjunto

El presente Informe Regional, en su análisis de resultados tiene dos componentes a resaltar. El primero, es la presentación gráfica o visual de las respuestas de cada país a las preguntas del cuestionario enviado por la Secretaría de la Convención como guía para la evaluación del nivel de cumplimiento. El segundo, es el reporte documentado de la situación actual de la región.

Para el análisis gráfico se utilizaron como insumos los Informes Nacionales remitidos por los Puntos Focales a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. La mayoría de estos Informes los preparó un equipo coordinador a través de diferentes actividades de consulta y validación, así como revisión de documentos, entrevistas y talleres.

Las respuestas al cuestionario se procesaron sin alterar lo expresado por los países, aunque los criterios considerados para responder las preguntas pueden haber variado de un país a otro. El equipo redactor y revisor se ha limitado únicamente a incorporar las respuestas que se recibieron.

Para el segundo componente se utilizaron una serie de documentos e informes nacionales y regionales: los siete Informes Nacionales de Áreas Protegidas, preparados como parte del Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Managua, Marzo 2003); el Informe Regional elaborado para el Quinto Congreso Mundial de Parques (Durban, Septiembre 2003); así como los informes enviados al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en diciembre de 2002, entre otros.

Criterios para la valoración de las respuestas

El cuestionario enviado por la Secretaría de la Convención contiene 21 preguntas agrupadas en seis grandes temas:

- Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas
- Marco Reglamentario
- Enfoque de la Gestión
- Recursos Disponibles
- Evaluación
- Cooperación Regional e Internacional

Para facilitar la interpretación del informe regional, se asignó un código de color y un valor numérico a cada tipo de respuesta. Estos valores son:

Respuesta	Valor	Color
Alto cumplimiento	3	verde
Medio cumplimiento	2	amarillo
Bajo cumplimiento	1	rojo

Con base en esta codificación se elaboraron seis tablas que sintetizan las respuestas de los países a las preguntas del cuestionario. Este instrumento permite visualizar fácilmente el nivel de cumplimiento reportado por cada país a cada pregunta y a cada uno de los grandes temas antes listados. Además, refleja el nivel de cumplimiento regional al agregar los puntajes individuales de los países.

El uso de este instrumento facilita la identificación de aquellos aspectos en los cuales existe mayor atraso de cumplimiento o diferencia entre los países, y de otros en los que el avance es mayor o más uniforme. Para facilitar la interpretación de las tablas, se presenta el siguiente ejemplo con las definiciones pertinentes:

Tema A								
Nº de pregunta	País 1	País 2	País 3	País 4	País 5	País 6	País 7	Región
1	2	3	1	3	3	2	3	17
2	1	3	3	2	3	3	1	16
3	3	2	2	1	2	3	3	16
Pp/Pm	6/9	8/9	6/9	6/9	8/9	8/9	7/9	49/63
%	66.6	88.8	66.6	66.6	88.8	88.8	77.7	77.7

a) Estructura de las tablas

Tema: Conjunto de preguntas del cuestionario que se refieren a un aspecto específico del Convenio.

Nº de pregunta: Según el orden correspondiente en el cuestionario. El número de preguntas (n) es variable por tema.

País: Cada columna corresponde al mismo país en todas las tablas. Cada celda tiene el puntaje de la respuesta reportada por cada país a cada pregunta. Los países fueron ordenados por ubicación geográfica.

b) Valores calculados por país

Pp: Puntaje por país por tema. Es la sumatoria de los puntos que corresponden a las respuestas reportadas por cada país a las preguntas de cada tema.

Pm = Puntaje máximo posible por país por tema, que es el resultado de multiplicar el número de preguntas de cada tema por el puntaje más alto posible para cada pregunta (3). En la tabla del ejemplo, el Pm es igual a 3 preguntas x 3 puntos = 9.

% = Expresa el grado de cumplimiento del país. Es el resultado de dividir Pp entre el Pm, multiplicado por 100. Un país que reporta 6 Pp de 9 posibles, tiene en consecuencia un nivel de cumplimiento del 66.6% para ese tema.

c) Valores calculados por tema

La columna de Región refleja la sumatoria de puntos de todos los países para cada pregunta. Esta sumatoria tiene un valor mínimo posible de 7 (1 punto por país) y un máximo posible de 21 (7 países x 3 puntos = 21). Para asignar el código de color correspondiente al nivel de cumplimiento regional se establecieron los siguientes rangos ponderados:

Rango de Puntos por pregunta	Color
7-11	Rojo
12 – 16	Amarillo
17 – 21	Verde

Finalmente, el porcentaje regional de cumplimiento por tema se obtiene dividiendo la sumatoria de puntos por país por tema ($\sum Pp1..7$), entre el total de puntos posibles de la tabla (resultado de multiplicar Pm x 7). En nuestro ejemplo, este cociente se obtiene de dividir 49 entre 63.

Esta metodología tiene limitaciones, ya que se basa exclusivamente en las respuestas suministradas por los países y no refleja las asimetrías y diferencias estructurales que existen

entre ellos. Además, la estructura del cuestionario no necesariamente revela el alcance relativo de los logros individuales en los diferentes aspectos de la conservación, uso y manejo de la biodiversidad.

Sin embargo, este método semicuantitativo permite agregar regionalmente la auto evaluación realizada, compara el nivel de avance entre temas y sirve de insumo para el análisis estratégico y la toma de decisiones para la futura gestión.

Análisis y Resultados

Sistema de Áreas Protegidas

Preguntas (1 a 3)

1. ¿Qué prioridad relativa se asigna a la creación y aplicación de un sistema nacional de áreas protegidas en el contexto de las demás obligaciones contempladas en el Convenio y en las decisiones de la Conferencia de las Partes?
2. ¿Existe un proceso de programación sistemática para la creación y aplicación de un sistema nacional de áreas protegidas?
3. ¿Se ha realizado una evaluación del grado en que la red existente de áreas protegidas abarca todas las áreas que se consideran de importancia para la conservación de la diversidad biológica?

Tema: Sistema de Áreas Protegidas								
Pregunta	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Región
1								18
2								16
3								18
Pp	3/9	9/9	9/9	9/9	7/9	7/9	8/9	52/63
%	33.33	100	100	100	77.77	77.77	88.88	82%

Puntos máximos totales de la tabla = 63

Sumatoria de puntos por país = 52

Porcentaje de cumplimiento regional = $52/63 = 82\%$

Documentación

Tal como se estableció en el Informe Mesoamericano preparado en el 2002 para la COP VI sobre el cumplimiento de los ocho países al Convenio, la conservación *in situ* ocupa el puesto de privilegio en las prioridades para la región mesoamericana, y también es uno de los aspectos en los que se ha avanzado mayormente. La excepción es el tema de especies exóticas y de conservación de prácticas y conocimientos indígenas y de comunidades locales, cuyo cumplimiento es bastante deficiente (CCAD 2002).

Cada uno de los países de Centroamérica cuenta con un SINAP establecido, creado con base en directrices nacionales. La creación de estas áreas está ligada a diferentes factores y prioridades a través del tiempo, iniciando con el establecimiento de áreas dedicadas a la conservación, la recreación y el turismo, la protección de sitios arqueológicos y el manejo de especies amenazadas; hasta llegar en años recientes a la creación de áreas de uso múltiple para enfrentar procesos de deterioro ambiental y proteger la generación de bienes y servicios ambientales, entre otros aspectos.

Todos estos procesos han llevado a que en la actualidad el SICAP tenga un total de 557 áreas protegidas legalmente declaradas, las cuales tienen una extensión aproximada de 129,640 Km² (SICAP 2003), lo que representa aproximadamente el 25% del territorio centroamericano (Ver mapa de Áreas Protegidas).

Cuadro 1

Número y extensión de las áreas protegidas declaradas en los países

País	Nº de Áreas Protegidas	% del # de áreas SICAP	Extensión (Ha)	% de la superficie del SICAP	% del territorio nacional
Belice	74	13.3	1,071,664.2	8.3	47.2
Guatemala	123	21.7	3,197,579.0	24.6	29.4
Honduras	76	13.6	2,220,111.0	17.1	19.7
El Salvador	3	0.5	7,110.7	0.05	0.33
Nicaragua	76	13.6	*2,242,193.0	17.3	17.0
Costa Rica	155	27.8	**1,288,834.0	9.9	25.2
Panamá	50	9.0	2,941,386.0	22.7	26.0
TOTAL	557	100	12,968,608.9	100%	

Fuente: Informes Nacionales de los países para el PCMAP, 2003. Cuestionarios entregados por los países a UICN. 2003 y actualizado por los países.

* El SINAP de Nicaragua se encuentra en un proceso de redefinición de la superficie de sus áreas.

** El SINAC de Costa Rica cuenta con varias áreas protegidas que incluyen categorías de manejo de áreas marino-costeras, las porciones marinas se encuentran en revisión y no se incluyen en esta tabla.

Cuadro 2

Número y extensión de las áreas protegidas propuestas en los países

País	Nº de Áreas Protegidas Propuestas	% del total de AP que correspondería al SINAP	Extensión (Ha)	% del Territorio
Belice	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Guatemala	25	15.5	120,861	1.28
Honduras	23	23.2	704,522.0	6.3
El Salvador	118	97.4	32,865.3	1.56
Nicaragua	19	20.0	84,180.0	0.7
Costa Rica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Panamá	18	26.4	ND	ND
TOTAL	203			

Fuente: Informes Nacionales de los países para el PCMAP, 2003. Cuestionarios entregados por los países a UICN. 2003, actualizado por los países.

Existen áreas protegidas propuestas que han sido identificadas, pero que aún no obtienen su debida declaratoria. En este sentido sobresale El Salvador con 118 áreas, las que representan el 97.4% del total de su SINAP. En total, el SICAP tiene 203 áreas propuestas (Cuadro 2), lo que establece entre declaradas y propuestas un total de 760.

De acuerdo con un cuestionario elaborado en el 2002 para PNUMA, a la pregunta sobre el respaldo que tienen las áreas protegidas y qué nivel tienen en la relación jerárquica administrativa del Estado, los países dieron las siguientes respuestas: Costa Rica (5)¹, Guatemala (1), Nicaragua (2.5), Panamá (3). Con estas apreciaciones se deduce que a nivel nacional las dependencias encargadas de los SINAP no cuentan con el apoyo suficiente.²

Aunque los países han establecido estructuras, generado políticas y regulaciones para la conservación y han adecuado el manejo de las áreas protegidas, la realidad demuestra que la conservación a largo plazo no está asegurada. Lo anterior está determinado por factores de distinta naturaleza: técnicos, financieros, ecológicos, socio-económicos, culturales y político-legales.

¹ Se utilizó una escala de 1 como mínimo y 5 como máximo.

² En esta consulta no se contó con los informes de Belice y Honduras.

En las áreas protegidas y su entorno están asentadas comunidades rurales o grupos étnicos que viven en extrema pobreza, por lo cual necesitan hacer uso de los recursos que allí encuentran para su sobrevivencia. Además, existen las amenazas constantes de grandes empresas y consorcios que tratan de obtener concesiones para el usufructo de los recursos naturales de esas áreas.

Durante los procesos de elaboración de las estrategias nacionales de biodiversidad se identificaron vacíos existentes en la representatividad de los ecosistemas en los SINAP. Un estudio del Banco Mundial (Dinerstein *et al* 1995) identifica para Centroamérica 33 ecoregiones, de las cuales 11 se consideran en estado crítico y 11 como amenazadas de desaparecer. De acuerdo con McCarthy *et.al* (1997), en Centroamérica existen ecoregiones que están poco representadas o mal representadas en los sistemas de áreas protegidas, tal es el caso de la selva húmeda Sierra Madre (Guatemala, El Salvador); los bosques altos de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua); el bosque húmedo estacional de Nicoya (Costa Rica); el monte seco de Nenton (Guatemala); el bosque seco de Panamá (Panamá); el bosque de pino de Islas de la Bahía (Honduras); las sabanas de Petén (Guatemala); el páramo de los Cuchumatanes (Guatemala); y el Valle del Motagua (Guatemala).

Marco Reglamentario

Preguntas (4 a 6)

4. ¿Existe un marco de política y/ o legislación que propicie el establecimiento y la gestión de zonas protegidas?
5. ¿Se han adoptado directrices, criterios y metas para apoyar la selección, establecimiento y la gestión de áreas protegidas?
6. ¿Entraña la gestión de las áreas protegidas el uso de incentivos tales como tarifas de acceso a los parques o arreglos para compartir los beneficios con las comunidades adyacentes y otros interesados pertinentes?

Tema: Marco reglamentario								
Pregunta	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Región
4								21
5								17
6								15
Pp	8/9	7/9	9/9	7/9	8/9	7/9	7/9	53/63
%	88.88	77.77	100.00	77.77	88.88	77.77	77.77	84%

Donde, Pp se refiere a puntos por país

Puntos máximos totales de la tabla = 63

Sumatoria de puntos por país = 53

Porcentaje de cumplimiento regional = 53/63 = 84%

Documentación

Las áreas protegidas de Centroamérica se administran bajo diferentes marcos legales y normas. En términos generales, se considera que los siete países cuentan con una abundante legislación que establece las potestades y regula la administración de las áreas protegidas. En el cuadro 3 se presentan las normas jurídicas principales para cada nación.

Cuadro 3
Principales normas jurídicas sobre áreas protegidas en los países de Centroamérica

País	Legislación
Belice	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley del Sistema Nacional de Parques, 1981 ▪ Ley Forestal ▪ Ley de Pesca ▪ Ley sobre la Protección a la Vida Silvestre, 1981 ▪ Ley de Monumentos Históricos ▪ Ley del Uso de la Tierra ▪ Ley de Protección Ambiental
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Constitución Política de la República (artículos 64 y 97) ▪ Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86, 1986 ▪ Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89, 1989, reformada por los Decretos 18-89 (1989), 110-96 (1996) y 117-97 (1997). ▪ Ley Forestal, Decreto 101-96, 1996 ▪ Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas, Acuerdo Gubernativo 759-90, 1990
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Constitución de la República (artículos 172 y 340) ▪ Ley Forestal, 1971. ▪ Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, Decreto No. 31, 1992. ▪ Ley General del Ambiente ▪ Reforma a la Ley General de la Administración Pública, Decreto No. 218, 1996 ▪ Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Acuerdo No. 921, 1997
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Constitución de la República (artículo 117) ▪ Ley de Conservación de Vida Silvestre ▪ Ley Forestal ▪ Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura ▪ Ley del Medio Ambiente, 1998 ▪ Anteproyecto de Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Ley 217), 1996 ▪ Reglamento de Áreas Protegidas, 1999 ▪ Diversas Normas Técnicas y Jurídicas
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554), 1995 ▪ Ley de Biodiversidad (No. 7788), 1998 ▪ Ley Forestal (No. 7575) y su reglamento, 1996. Reformada por las leyes No. 7609 (1996), 7761 (1998) y 7788 (1998) ▪ Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales (No. 6084), 1977 ▪ Ley de Conservación de la Vida Silvestre (No. 7317) y su reglamento, 1992. Reformada por las leyes Nos. 7495 (1995), 7497 (1995) y 7788 (1998).
Panamá	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ley General del Ambiente (Ley No. 41), 1998. ▪ Ley Forestal, 1994 ▪ Ley de Vida Silvestre (Ley No. 24, 1995) ▪ Resolución JD. 09-94 ▪ Resolución JD. 022-92

Fuente: Cuestionario completado por los países para el PNUMA, 2001. Informes Nacionales para PCMAP, 2003.

Como se observa en el cuadro 3 varios de los países cuentan con leyes específicas para sus sistemas de áreas protegidas o parques nacionales (Belice, Guatemala y Costa Rica), los restantes países han establecido su sistema nacionales a través de otras leyes, principalmente a través de la Ley del Ambiente. En el caso de El Salvador, la Ley de Áreas Naturales Protegidas está en proceso de discusión en la Asamblea Legislativa.

Los marcos políticos y legales (con la excepción de Belice, según respuesta al cuestionario), establecen las directrices para la selección, establecimiento y gestión de las áreas protegidas. Así como su designación en cuanto a categoría de manejo, según los objetivos establecidos para el área y sus recursos naturales.

En el uso de incentivos, en los últimos años los países han tratado de utilizar las facultades que tienen- según la legislación vigente- para cobrar tarifas de acceso a las áreas protegidas. Sin embargo, los alcances logrados aún son muy limitados.

En general es reducido el número de áreas protegidas donde se cobra este tipo de tarifas. Las principales limitaciones para ello son el escaso personal disponible (en muchos casos

inexistentes) y la falta de servicios que ofrecen para justificar el cobro. Existen otros servicios concesiones y servicios ambientales y no ambientales que en la mayoría de los casos no son internalizados a las áreas protegidas, por ejemplo, la instalación de antenas de transmisión.

Como consecuencia de lo anterior, la situación financiera para la gestión de las áreas protegidas es precaria. Además, los canjes de deuda, los incentivos fiscales u otro tipo de mecanismos que existieron en las décadas de los ochenta y noventa se han ido perdiendo por el debilitamiento en los mecanismos de mercado específicos y por decisiones de las autoridades nacionales.

Se reportan avances mínimos en el establecimiento de mecanismos para compartir los beneficios con las comunidades locales que habitan en estas áreas. En el caso del ecoturismo, las utilidades de las áreas protegidas son limitadas, a excepción de Costa Rica y Guatemala (CCAD 2003) y en general se limitan a concesiones para prestar algún tipo de servicio al turista. Algunas comunidades se han beneficiado al prestar hospedaje al visitante, aunque en su mayoría este servicio se realiza en las zonas de amortiguamiento.

Los bienes y servicios que proporcionan las áreas protegidas de la región no han sido debidamente contabilizados en las cuentas nacionales, aunque muchas comunidades se benefician de ellos. Hay que resaltar que existen algunas experiencias de concesiones de uso de recursos y mecanismos de venta de servicios ambientales exitosas y pueden ser ejemplos para otras regiones del mundo.

Este es el caso de las concesiones forestales comunitarias de la Reserva de la Biosfera Maya en el Departamento de Petén en Guatemala; las concesiones de aprovechamiento de huevos de tortuga en el Refugio de Vida Silvestre Ostional en Costa Rica y en el Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas en Panamá y la valoración económica de los recursos hídricos en la cuenca del Río Humuya (para ajuste de cánones de agua en Honduras), entre otros.

Enfoque de la Gestión

Preguntas (7 a 11)

7. ¿Se han evaluado las principales amenazas a las áreas protegidas y a su diversidad biológica a fin de establecer programas para combatir las amenazas y sus efectos e influir en las causas principales?
8. ¿Se establecen y se manejan las áreas protegidas en el contexto más amplio de la región en la que están situadas, teniendo en cuenta otras estrategias sectoriales y contribuyendo a ellas?
9. ¿Son las áreas protegidas de carácter diferente, cumpliendo una serie de objetivos de gestión diferentes y/ o se administran a través de distintos sistemas de gestión?
10. ¿Existe una participación amplia de los interesados en el establecimiento y gestión de las áreas protegidas?
11. ¿Existen en su país áreas protegidas establecidas y administradas por organismos no gubernamentales, grupos de ciudadanos, el sector privado y personas individuales y están reconocidas oficialmente?

Tema: Enfoque de la Gestión								
Pregunta	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Región
7								14
8								15
9								16
10								16
11								21
Pp	12/15	13/15	13/15	11/15	11/15	11/15	7/15	82/105
%	80.00	86.66	86.66	73.33	73.33	73.33	73.33	78%

Donde, Pp se refiere a puntos por país
Puntos máximos totales de la tabla = 105
Porcentaje de cumplimiento regional = 82/105 = 78%

Documentación

Las amenazas a las áreas protegidas de Centroamérica están debidamente identificadas. También se han realizado diferentes ejercicios para definir las medidas con el fin de revertirlas o atenderlas.

Sin embargo, con excepción de Honduras (según respuestas al cuestionario), en el resto de países no existe un programa estructurado en tal sentido y se trabaja con instrumentos específicos para casos específicos, como la prevención y el combate de incendios forestales, para los cuales sí existen programas preventivos.

Las estrategias nacionales de biodiversidad y sus planes de acción hacen referencia a las amenazas y sus formas de combatirlas. Asimismo, en seis de los siete países (excepto Belice) se han adoptado algunos instrumentos para medir la efectividad del manejo de las áreas protegidas, que contemplan un análisis de amenazas en los diferentes ámbitos.

En cuanto a la gestión, existe en Centroamérica una visión moderna del manejo de las áreas protegidas. Estas dejaron de ser concebidas de forma aislada del contexto social y económico en que se encuentran. Una muestra de este cambio son las directrices que los países han adoptado para la elaboración de los planes de manejo. En todos los casos se establece la necesidad de realizar estos procesos de forma participativa, con los actores e interesados, tomando en cuenta sus intereses y el contexto regional, tal como quedó expresado en la Declaración de Managua, firmada por el Consejo de Ministros de la CCAD, en ocasión del PCMAP en el 2003.

Esta visión, sin embargo, no ha sido acompañada por la ejecución de los nuevos enfoques de trabajo como son el manejo por ecoregiones, de ecosistemas y de paisaje, abordajes que no han sido adoptados en la práctica debido a la falta capacitación de los funcionarios y a la falta de personal y recursos operativos que esto demanda. El avance se ha reducido a una simple visión o necesidad identificada.

La experiencia de Costa Rica es un ejemplo de una forma innovadora de gestionar la conservación a nivel nacional. Desde 1995 el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) es el ente encargado de atender esta temática. En la actualidad el país está dividido en 11 áreas de conservación que le ha permitido la participación de diferentes actores a través de consejos sectoriales, consejos regionales ambientales, consejos locales ambientales, comités de manejo de áreas protegidas, comités de cuencas, etc. No obstante, el trabajo sectorial y la coordinación interinstitucional no ha sido todo lo efectivo que se esperaba, por lo que falta avanzar en este aspecto.

En El Salvador actualmente se está trabajando en la estructuración de sus áreas de conservación. En Nicaragua, desde 1996 se ha desarrollado un interesante proceso participativo en la elaboración de los planes de manejo de las áreas protegidas, destacándose el papel del Consejo Local de Desarrollo Sostenible del Sureste de Nicaragua (CODESO), como una instancia de gestión para la conservación y el desarrollo. En el caso de Guatemala, se han abierto procesos como el de la Coordinadora de Izabal y el Grupo del Corredor Biológico del Bosque Nuboso, que reúne los distintos actores para fomentar el desarrollo sostenible en tales regiones. En Honduras, se destacan las experiencias de gestión en La Mosquitia y en el Corredor Biológico Pibotex.

Centroamérica ha adoptado un programa estratégico conocido como Corredor Biológico Mesoamericano, el cual busca mejorar el manejo de las áreas protegidas y la conservación y uso adecuado de la biodiversidad a través de la gestión integrada, participativa y multisectorial de dichos recursos. Este programa se sustenta actualmente sobre varios proyectos en ejecución, principalmente el Proyecto para la Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano (PCCBM) que abarca los siete países de Centroamérica y los cinco estados del sur de México; el Proyecto Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) que lo integran México, Belice, Guatemala y Honduras y el Proyecto Ambiental Regional para Centroamérica (PROARCA) que ha desarrollado una serie de instrumentos para el manejo de las áreas protegidas (Ver mapa CBM).

Es importante señalar que cada país ha definido diferentes categorías de manejo para sus áreas protegidas. Solo en Panamá se manejan 18 categorías y a nivel regional se utilizan 36.

Cuadro 4

Cantidad de áreas protegidas por país y por categoría de manejo en Centroamérica

Categoría de Manejo	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá*	Total
Área Natural							1	1
Área Recreativa							2	2
Área Silvestre							1	1
Área Uso Múltiple		3	5				1	9
Biotopo Protegido		6						6
Bosque Protector							3	3
Corredor Biológico							1	1
Humedal				1		15	1	16
Humedal de Importancia Internacional							4	4
Jardín Botánico			1					1
Manantial		2						2
Manejo de hábitat por especies			7					7
(*)Monumento Nacional (*)Monumento Histórico (*) Monumento Cultural	4	5	4	1	2 1	1		18
Monumento Natural			5				3	8
Parque Nacional	16	20	20	2	3	26	12	99
Parque Nacional Marino			4				2	6
Parque Regional		7						7
(***)Refugio Nacional de Vida Silvestre (*)Santuarios de Vida Silvestre	7	4	13		4	61	9	98
Reserva Arqueológica	10							10
(*)Reserva Biológica (incluye Reserva Natural Absoluta) (*)Reserva Científica		1	24		2	10	1	37
Reserva de Biosfera		5	2		2		2	11
Reserva Forestal	19		2			11	9	41
Reserva Forestal Antropológica			2					2
Reserva Hidrológica							2	2
Reserva Marina	8		7					15

Reserva Natural	4				62			66
Reserva de Recursos Genéticos					2			2
(*)Zona Protectora (*) Zona Protectora de Agua (*) Zona Protectora Hídrica			2			31	3	36
Zona Reserva Ecológica			1					1
Zona de Veda		27						27
Sin Categoría				1				1

Fuente: Informes Nacionales de país para el PCMAP, 2003. Cuestionarios entregados por los países a UICN, 2003.

* En total en Panamá se utilizan 18 categorías, en el cuadro se mencionan 15 de ellas (McCarthy y Dimas 1998).

** En Nicaragua la categoría de manejo es Refugio de Vida Silvestre

Del total de las áreas protegidas de Centroamérica, más del 67% corresponden a las categorías de manejo flexible IV, V y VI de la UICN, lo que permite algún tipo de aprovechamiento y por tanto, contribuyen a la reducción de la pobreza en la región.

Si bien, en épocas pasadas las áreas protegidas fueron impuestas a las comunidades locales y fueron motivo de disputa, en los últimos tiempos esto ha cambiado y los países establecieron mecanismos de consulta para la resolución de los conflictos. Además, los procesos de participación tomaron mucha fuerza en los últimos años. Estas iniciativas se encuentran en distinto grado de desarrollo y existen diferencias en cada país. No obstante, los procesos de descentralización y delegación de funciones son mecanismos que se están estimulando para mejorar la participación y la gestión de las áreas protegidas. Dichos procesos han sido lentos y los logros aún son parciales.

Cuadro 5
Instancias locales vinculadas a la gestión de las áreas protegidas

País	Instancia
Belice	<ul style="list-style-type: none"> Asociación de Manejadores de Áreas Protegidas
Guatemala	<ul style="list-style-type: none"> Consejos Directivos Consejos Consultivos Juntas Directivas Departamentos de Áreas Protegidas en Municipalidades * Unidad de Coordinación con Pueblos Indígenas y Sociedad Civil
Honduras	<ul style="list-style-type: none"> Comités Regionales de Áreas Protegidas (CORAP) Comités Locales de Áreas Protegidas (COLAP)
El Salvador	<ul style="list-style-type: none"> ADESCOS Municipalidades Cooperativas ONG
Nicaragua	<ul style="list-style-type: none"> Comités Locales de Apoyo al Comanejo de Áreas Protegidas Comités Locales de Desarrollo Sostenible Comisiones Ambientales Municipales (CAM)
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> Consejos Regionales de las Áreas de Conservación Consejos Locales Comités de Manejo de Áreas Silvestres Protegidas Comités de Cuencas Comisiones para la protección de recursos específicos
Panamá	<ul style="list-style-type: none"> Comisiones Consultivas Patronatos

Fuente: Informes Nacionales de los países para el PCMAP, 2003. Cuestionarios entregados por los países a UICN, 2003.

* Unidad propuesta por Secretaría Ejecutiva de CONAP, el 16 de diciembre de 2003, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas y creada en tal fecha. Cuenta con un Consejo Asesor.

Los acuerdos de coadministración o de comanejo son uno de los mecanismos que está tomando fuerza en la región para mejorar la gestión de las áreas protegidas. Estos se

fundamentan en el reconocimiento de que las partes o actores no tienen todas las capacidades y competencias para lograr los objetivos de manejo, por lo que requieren aplicar algunos principios, como los de complementariedad y subsidiaridad.

Los países de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, cuentan con respaldos legales generales para ejecutar estos acuerdos o procesos. Actualmente se reportan para Centroamérica 123 experiencias o procesos de manejo participativo y representa el 21.6% del SICAP. Cabe destacar que para Honduras y Belice este tipo de gestión compartida representa el 40.7% y el 27% de sus SINAP, respectivamente.

Cuadro 6
Número y porcentaje del SINAP de áreas protegidas que se encuentran en coadministración en los países

País	Nº de áreas protegidas	% del total de áreas en el SINAP
Belice	20	27.0
Guatemala	25	20.3
Honduras	31	40.7
El Salvador	*30	24.8
Nicaragua	8	10.5
Costa Rica	6	3.9
Panamá	4	8.0
TOTAL	123	

* De este total solo 2 están legalmente declaradas

En general, en las experiencias en marcha se tiende a trabajar con un sector específico a la vez, aunque hay países como Panamá donde la tendencia es laborar con varios sectores y actores, a través de patronatos, estructura muy similar a la de un comité local.

Las Organizaciones No Gubernamentales son las que mayor número de experiencias de coadministración han desarrollado: de 112 casos registrados, 69 (61.6 %) son ejecutados con esta clase de organizaciones. En el caso particular de las comunidades (indígenas y no indígenas), éstas cuentan con 8 experiencias para un 7.1 % del total (Cuadro 7).

Es importante mencionar que las experiencias de coadministración en marcha involucran una amplia gama de categorías de manejo, desde las más restrictivas como parques nacionales hasta reservas de uso múltiple.

Cuadro 7
Tipo de sector involucrado en las experiencias de coadministración por país

Tipo de organización involucrada	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Total	%
Estado – ONG	13	11	22	14	8	1		69	61.6
Estado – Universidad		7	1			1		9	8.0
Estado – Municipalidad		7	8	4				19	17.0
Estado – Comunidad	7						1	8	7.1
Estado - Comité o Patronato						4	2	6	5.3
Estado – Estado							1	1	0.9
Total	20	25	31	18*	8	6	4	112	

* En el informe de El Salvador se establece la relación para tan solo 18 de sus 30 experiencias

Fuente: Informes Nacionales de los países para el PCMAP, 2003. Cuestionarios entregados por los países a UICN, 2003.

Las áreas protegidas privadas son otro mecanismo que contribuye a la conservación de la biodiversidad de la región y que ha ido creciendo en los últimos años. En Belice, Guatemala y Nicaragua son consideradas como parte de los SINAP. En la actualidad el país con más áreas protegidas privadas es Costa Rica. No obstante, es en Belice donde está la mayor cantidad de hectáreas bajo esta modalidad de manejo, las cuales representan el 5.7% del territorio. Como se mencionó previamente, en su conjunto las áreas protegidas privadas aportan a la conservación de recursos naturales de Centroamérica una extensión superior a las 215 mil hectáreas.

Cuadro 8
Áreas protegidas privadas por país

País	Nº de áreas privadas	Extensión (HA)	% del territorio nacional que representan
Belice	5	122,538.0	5.7
Guatemala	52	21,622	0.67
Honduras	ND	ND	ND
El Salvador	13	10,092.7	0.48
Nicaragua	23	5,864.9	0.04
Costa Rica	77	*54,480.0	1.07
Panamá	ND	ND	ND
TOTAL		214,597.6	

* Representa las áreas privadas de las cuales el SINAC tiene información de extensión.

Nota: Para los casos de Guatemala y Belice estas áreas privadas han sido también consideradas en el dato de ASP declaradas, recordar que en estos países las ASP privadas "reportadas" a las instituciones estatales competentes son incorporadas al SINAP.

Fuente: Informes nacionales de los países para el ICMAP, 2003. Cuestionarios entregados por los países a UICN. 2003

En estos momentos se puede considerar que existen asociaciones o redes de áreas naturales privadas bien consolidadas en Guatemala y Costa Rica. En Panamá y Nicaragua las asociaciones nacionales ya están formadas y en Honduras están en proceso de organización.

Es importante también mencionar las áreas protegidas municipales, reportadas El Salvador, Honduras y Guatemala, para un total de 15 áreas y 87,077.1 hectáreas. A esto hay que agregar que en Costa Rica y Panamá, aunque no se reportan áreas municipales, la legislación permite a las municipalidades establecer sus áreas protegidas. Por su parte, Nicaragua en el año 2003 inició el proceso para el reconocimiento de Parques Ecológicos Municipales, con la iniciativa de las alcaldías municipales.

Cuadro 9
Áreas municipales que son reconocidas y adoptadas por los SINAP

País	No. de áreas municipales	Extensión (HA)	% del territorio nacional que representan
Guatemala	7	29,977.9	0.27
Honduras	3	57,662.0	0.5
El Salvador	6	927.1	0.04
TOTAL	16	88,567.0	

Nota. En el caso de Guatemala las áreas protegidas municipales son consideradas como parte del SINAP, por lo que fueron antes contabilizadas en el dato de ASP declaradas para ese país.

Fuente: Informes nacionales de los países para el ICMAP, 2003. Cuestionarios entregados por los países a UICN. 2003

Recursos Disponibles

Preguntas (12 a 13)

12. ¿Son los recursos humanos, institucionales y financieros adecuados para la aplicación cabal de la red de áreas protegidas, incluida la gestión de áreas protegidas concretas?
13. ¿Ha solicitado/ recibido su país asistencia financiera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial o de alguna otra fuente internacional para el establecimiento/ la gestión de áreas protegidas?

Tema: Recursos Disponibles								
Pregunta	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Región
12								9
13								21
Pp	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	5/6	5/6	30/42
%	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	83.33	83.33	71%

Donde, Pp se refiere a puntos por país
Puntos máximos totales de la tabla = 42
Porcentaje de cumplimiento regional = 30/42 = 71%

Documentación

De los aspectos tratados en este informe, los recursos disponibles para la gestión de las áreas protegidas reciben la calificación más baja. En ninguno de los casos se considera que los recursos existentes sean los necesarios o que se cuente con las condiciones para asegurar el manejo adecuado de las áreas protegidas y su financiamiento a largo plazo. Por el contrario, los presupuestos manejados por las entidades que administran los SINAP se han visto reducidos por diferentes motivos, tales como ajustes estructurales, pérdida de valor de la moneda o control del gasto público..

En general, los presupuestos asignados solo cubren parte de la planilla de dichas instituciones y algunos de los gastos operativos. Algunas de las situaciones planteadas por los países ponen en perspectiva la situación que se vive en la región. En Nicaragua, por ejemplo, los recursos financieros nacionales son escasos, prevaleciendo los de la cooperación internacional en el financiamiento a la conservación en áreas protegidas. No se cuenta con un plan de financiamiento a largo plazo, aunque se realizan esfuerzos para dotar al país de tales instrumentos. La gestión de áreas protegidas se ha realizado con evidente déficit de recursos, lo que al final se traduce en escaso personal, poca capacidad operativa y un bajo nivel de gestión en gran parte de sus áreas.

En Costa Rica, el Presupuesto Ordinario de la República cubre un porcentaje importante de la planilla (78% del personal destacado en las áreas protegidas), además de contemplar partidas diversas para la compra de tierras y otros. Se estima un déficit de un 40% tanto en recursos financieros como en personal y equipo necesario.

Un aspecto coincidente en todos los países es el reconocimiento de la utilidad de los fideicomisos o fondos patrimoniales, los cuales contribuyen en buena parte a solventar las necesidades operativas de los SINAP.

En materia de financiamiento para la conservación, la región enfrenta dos problemas básicos. Por un lado la falta de políticas nacionales claras y mecanismos de internalización de costos que contribuyan a la gestión de las áreas protegidas; por otra parte, la falta de mecanismos claros en los procesos de negociación de cooperación internacional, tanto al interno de los países como en la relación con los donantes.

Evaluación

Preguntas (14 a 16)

14. ¿Se han evaluado los obstáculos que impiden el establecimiento y la gestión de un sistema adecuado de áreas protegidas a fin de tomar medidas al respecto?
15. ¿Existe o se está preparando algún programa para evaluar periódicamente la eficacia de la gestión de las áreas protegidas y actuar sobre la base de esta información?
16. ¿Se ha realizado alguna evaluación del valor de los beneficios materiales y no materiales y de los servicios que proporcionan las áreas protegidas?

Tema: Evaluación								
Pregunta	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Región
14								16
15								16
16								15
Pp	4/9	7/9	5/9	9/9	5/9	7/9	7/9	47/63
%	44.44	77.77	55.55	100.00	55.55	77.77	77.77	75%

Donde, Pp se refiere a puntos por país
Puntos máximos totales de la tabla = 63
Porcentaje de cumplimiento regional = $47/63 = 75\%$

Documentación

Como se mencionó antes, diversos procesos e iniciativas han identificado a nivel nacional y regional los obstáculos que impiden el establecimiento y la gestión de un sistema adecuado de áreas protegidas. Si bien, se han dado algunos avances en su solución, muchas de estas limitantes persisten y están presentes desde hace tiempo. Entre ellas vale resaltar (CCAD 1998):

- a) Limitada integración de la sociedad civil al quehacer de las áreas protegidas.
- b) Financiamiento inadecuado.
- c) Conflictos sociales por el uso de la tierra.
- d) Falta de políticas y legislación adecuada, existencia de legislación incongruente con las necesidades de los SINAP.
- e) Carencia de estrategias de capacitación para los sectores involucrados con las áreas protegidas.
- f) Escaso manejo de las áreas protegidas.
- g) Desconocimiento de los recursos naturales y culturales existentes.
- h) Desarticulación entre los proyectos regionales y los SINAP.

A pesar que es posible agrupar los obstáculos que se presentan para el desarrollo adecuado de las áreas protegidas, varios de ellos son transversales o tienden a convertirse en círculos viciosos.

Un primer aspecto a considerar es el hecho que las actuales políticas de manejo de las áreas protegidas no satisfacen las expectativas socioeconómicas y ecológicas de la población, lo que provoca que varios sectores sociales -que podrían involucrarse en la conservación *in situ*- no se sientan incentivados para realizarla. Por ejemplo, muy pocas áreas silvestres de la región generan recursos propios y no hay un reconocimiento económico del valor de los bienes y servicios ambientales.

El segundo aspecto es que la capacitación de los administradores de estas áreas no está orientada en la dirección correcta. Los administradores tradicionales no están adecuadamente capacitados para conducir un manejo participativo y, por otra parte, la capacitación está más dirigida a los niveles profesionales y estatales que a los niveles operativos. Esto se agudiza por el hecho que las capacitaciones son dirigidas por la oferta existente y no por las necesidades de los usuarios. En conclusión, no se está aprovechando de manera óptima la participación local principalmente de los gobiernos locales, principales responsables de la gestión ambiental a ese nivel.

Los aspectos institucionales son el tercer punto, la descoordinación existente inter e intrasectorial debilita la gestión y la promoción de las áreas protegidas. El apoyo internacional no obedece necesariamente a las estrategias nacionales, lo que implica pérdida de recursos y desaprovechamiento de oportunidades. A esto se suma algún nivel de recelo y por lo tanto de descoordinación entre los SINAP, los proyectos regionales y organizaciones internacionales presentes en la región. La debilidad en las políticas nacionales de investigación, su falta de aplicación en los temas que demanda la gestión de estas áreas y la falta de aprovechamiento y circulación de la información generada dificulta aún más el desarrollo de los SINAP.

Finalmente, el insuficiente recurso económico que el Estado aporta a la conservación *in situ* y la falta de fondos causan deficiencias en el manejo de las áreas protegidas. En general, en las políticas nacionales, las necesidades de estas regiones no tienen el grado de prioridad suficiente como el asignado a las necesidades inmediatas de la población humana, sumados al hecho que la aplicación de la legislación existente en materia de regulación de las amenazas es de difícil cumplimiento.

A excepción de Belice, el resto de países de Centroamérica cuentan con algún sistema para evaluar periódicamente la eficacia de la gestión de las áreas protegidas. Todas las metodologías utilizadas se derivan de un mismo sistema, el cual ha sido adaptado a las necesidades propias de los países y ha sido oficializado en todos ellos. Sin embargo, su aplicación no es completa y se espera que con la reciente adopción de un sistema mínimo por parte del Consejo Centroamericano de Áreas Protegidas, que incluye 32 criterios, en los próximos años se extienda su uso a la totalidad de las áreas protegidas de la región. El sistema actual evalúa exclusivamente los aspectos administrativos.

En los últimos años, con la contracción de la cooperación externa, los países han comenzado a discutir la necesidad de tener recursos financieros provenientes de los usuarios de los bienes y servicios ambientales que las áreas protegidas generan. La valoración de estos beneficios es uno de los vacíos de información más importantes en Centroamérica. Así el tema del pago por servicios ambientales (PSA) se está expandiendo en la región rápidamente.

Los estudios en este tema están empezando a ser desarrollados y en algunos de los países se han concentrado en áreas protegidas y temas específicos, como por ejemplo, en el caso de El Salvador donde se ha realizado la valoración económica de los servicios recreativos en el Área Natural Protegida Laguna El Jocotal o la valoración económica del Humedal Barrancones. En Guatemala existe un estudio de valoración económica del SIGAP, que se concentra en los bosques y el agua. El fondo del agua de la Sierra de las Minas cuenta con un capital semilla y una estructura organizativa para implementar mecanismos de pago por servicios derivados del uso de los recursos hídricos del área.

En el caso de Costa Rica se han efectuado estudios para la valoración económica del agua en algunas áreas de conservación, igualmente la valoración de la actividad del turismo en áreas

protegidas. Es importante recalcar que en Costa Rica existe, en el ámbito institucional, un Programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) en tierras privadas, igual que un Programa de Implementación Conjunta, donde se han realizado valoraciones económicas sobre la fijación de carbono de los bosques en las áreas protegidas.

En el caso de Honduras se han desarrollado interesantes experiencias de valoración económica del agua como el caso de la cuenca del río Humuya. Los resultados de este estudio han aportado información y criterios para el establecimiento del canon de agua en el ámbito municipal y su potencial generalización al resto del país. Actualmente, la Escuela Panamericana de Agricultura El Zamorano ha sistematizado las principales experiencias de pago por servicios ambientales en el ámbito nacional. En Nicaragua se ha desarrollado una línea de base y un estudio para los municipios con el fin de establecer un programa de pago por servicios ambientales en la región del sureste; además, existen alrededor de cuatro municipios que están implementado programas locales de pago por servicios ambientales.

En Panamá, el tema de PSA ha sido incluido como parte del *pensum* académico en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Panamá, que tiene potencial para convertirse en un centro regional de capacitación en este tema. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en conjunto con la Contraloría de la República, están llevando a cabo seis estudios de valoración económica de PSA con el propósito de generar indicadores económicos ambientales para las cuentas nacionales.

Cooperación Regional e Internacional

Preguntas (17 a 21)

17. ¿Colabora o está su país en contacto con países vecinos para establecer y/o gestionar áreas protegidas transfronterizas?
18. ¿Son los principales profesionales de las áreas protegidas de su país miembros del Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de la UICN, lo cual ayuda a promover que se comparta la información y experiencia?
19. ¿Ha proporcionado su país información sobre sus áreas protegidas al Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación de la UICN para que pueda realizarse una evaluación científica de la situación de las áreas protegidas del mundo?
20. Si su país tiene áreas protegidas u otros sitios reconocidos o designados conforme a un convenio o programa internacional (incluidos los convenios y programas regionales), sírvase proporcionar copias de los informes presentados a esos programas o resúmenes de los mismos.
21. ¿Considera que su país tiene una experiencia considerable en algunas de las actividades de las áreas protegidas que pueda aprovechar directamente otras Partes Contratantes?

Tema: Cooperación Regional e Internacional								
Pregunta	Belice	Guatemala	Honduras	El Salvador	Nicaragua	Costa Rica	Panamá	Región
17								19
18					NO REPORTO	NO REPORTO	NO REPORTO	NA
19				NO REPORTO				NA
20								21
21								21
Pp	10/12	12/12	6/12					
%								

Para este tema algunos países no completaron las respuestas de las preguntas 18 y 19 por lo que el proceso de análisis y valoración del tema en su conjunto no será posible.

Documentación

Más del 40% de los territorios protegidos en Centroamérica se encuentran en áreas fronterizas. Las principales reservas de bosques y por lo tanto de biodiversidad de la región se encuentran en sus fronteras. Allí se ubican la Selva Maya de Guatemala, los bosques caribeños de las dos fronteras nicaragüense y hondureña, así como el Darién panameño. A esto hay que sumar que las regiones fronterizas son espacios de gran riqueza cultural, más de 30 grupos indígenas habitan espacios transfronterizos y en algunos casos son sociedades transfronterizas, cuya cultura y población no separan las fronteras. Esta región es un área geográfica ideal para aplicar los mecanismos, acuerdos e iniciativas que se requieren para implementar la cooperación en el tema ambiental entre dos o más países.

Áreas silvestres comunes y cuencas estratégicas, grupos étnicos, comunidades campesinas y ecosistemas de altísimo valor se encuentran divididos solo por límites políticos, que en la realidad forman una unidad más allá de las fronteras. Actualmente existen un total de 51 áreas protegidas transfronterizas, de las cuales 30 cuentan con su debida declaratoria y 23 son binacionales.

La existencia de iniciativas bi y trinacionales ha propiciado la generación de mecanismos de coordinación para el trabajo ambiental, fundamentalmente impulsado por la necesidad de determinados proyectos de implementar el manejo conjunto. Son muy pocos los casos en donde el trabajo entre los países se hace sistemáticamente. Los casos más notorios son: el Plan Trifinio (Guatemala, Honduras y El Salvador); el Parque Internacional La Amistad (Costa Rica y Panamá), el Golfo de Fonseca (El Salvador, Honduras y Nicaragua); el Golfo de Honduras (Guatemala, Honduras y Belice), el Parque Internacional Solidaridad (Honduras y Nicaragua) y la experiencia del SI-A-PAZ (Nicaragua y Costa Rica).

La Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central y el Plan de Acción 1988-2000; entre otros, son documentos que han insistido en la necesidad de fortalecer la coordinación y manejo de las áreas protegidas transfronterizas.

Dado su valioso papel para el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y conectividad biológica entre los países, la gestión de las áreas protegidas transfronterizas ha sido definido como tema prioritario en el Proyecto para la Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano (PCCBM).

La importancia de los recursos naturales de Centroamérica no solo es reconocida y valorada por los países de la región, sino que ha recibido un reconocimiento internacional. En Centroamérica existen 43 sitios con denominaciones internacionales, entre ellas: 31 Sitios Ramsar; 9 Sitios de Patrimonio Mundial Natural y 9 Reservas de la Biosfera (Cuadro 10). Por ejemplo, la Reserva del Hombre y la Biosfera del Río Plátano en Honduras tiene más de una denominación; como Reserva de Biosfera y como Sitio de Patrimonio Mundial Natural. Otro caso, es la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, la cual contiene otras áreas protegidas que a su vez tienen declaración internacional, como son el Parque Nacional Tikal, sitio de Patrimonio Mundial Mixto y el Parque Nacional Laguna del Tigre, Sitio Ramsar. En toda la región algunas de estas áreas están conformadas por territorios que albergan diferentes tipos de áreas protegidas y no protegidas.

Cuadro 10

Áreas Protegidas que han recibido un reconocimiento internacional

País	S. Ramsar	S. Patrimonio Mundial	Reserva de la Biosfera
Belice	1	1	0
Guatemala	5	2	2**
Honduras	1	1	1
El Salvador	1	0	0
Nicaragua	8***	0	2
Costa Rica	11	3	2
Panamá*	4	2	2
TOTAL	31	9	9

Fuente: Informes Nacionales de los países para el PCMAP, 2003. Cuestionarios entregados por los países a UICN, 2003.

* Son datos de 1998.

** La categoría de Reserva de la Biosfera es nacional según la legislación en Guatemala. En la tabla solo aparecen aquellas que tienen reconocimiento internacional.

*** En Nicaragua, de los 8 Sitios Ramsar mencionados, 7 son áreas protegidas.

Consolidación regional de resultados

De los seis temas en que se ha organizado este informe, cinco han sido completados en su totalidad por los países y uno, el referido a Cooperación Regional e Internacional, no fue reportado por algunos países, por lo que no se considera en el siguiente análisis³.

De todos los temas, el relativo al Marco Reglamentario es el que alcanza un mayor porcentaje de cumplimiento al nivel regional con 84 %, en tanto que el tema de Recursos Disponible es el que obtuvo el menor porcentaje, con 71 %. Esta diferencia relativa, aunque numéricamente no es tan grande (13 %) tiene una expresión concreta al analizar todos los factores y componentes que integran los procesos de gestión de los sistemas nacionales y regional de áreas protegidas.

Por un lado, los recursos disponibles en los países están orientados a aspectos más institucionales que operativos, de manera que el personal de las instituciones rectoras, centros de investigación y otras instancias, dedican más tiempo y esfuerzo a la creación de los marcos institucionales, estratégicos y legales para la gestión de los SINAP. Esto ha provocado la producción de una serie de instrumentos normativos y reglamentarios que permiten reportar un considerable avance en este tema en la región.

Por otro lado, los recursos disponibles para aspectos operativos directos en las áreas protegidas de los sistemas nacionales son insuficientes, recursos que en gran parte, son procedentes de la cooperación internacional, la cual- aunque solidaria y comprometida- no logra satisfacer las crecientes necesidades derivadas de un igualmente creciente proceso de gestión.

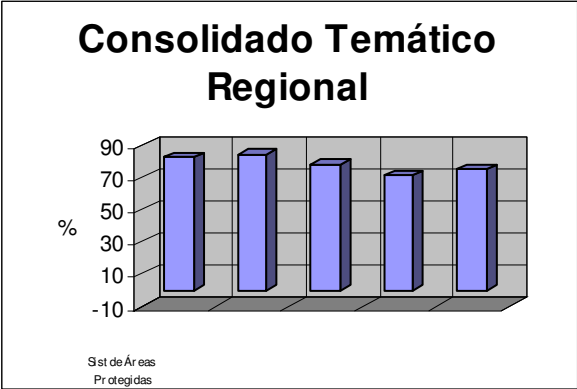
Sumado a esto, tal como se ha visto a lo largo del informe, las comunidades y actores locales diversos aún no asumen compromisos con la gestión de las áreas protegidas y por lo tanto, todavía no se les puede considerar como socios directos de estos procesos y menos aún como suplidores de recursos. Más bien, dada la precaria situación económica que en su mayoría atraviesan, son demandantes y consumidores directos.

Esto podría explicar porqué los mayores porcentajes de cumplimiento están en los temas que tienen que ver con arreglos, procesos y planes institucionales, más que con los temas orientados a la gestión operativa. Sin embargo esto no significa un desbalance negativo, sino que está estrechamente relacionado con los nuevos y recientes procesos de organización y reestructuración de los sistemas políticos e institucionales de la región.

³ Pese a lo que no todos los países reportaron sobre este tema, es importante destacar que la región ha sido sujeto de atención por parte de la cooperación internacional.

Lo anterior refleja los procesos organizativos e innovadores de una región joven, que está emergiendo vigorosa en el contexto internacional de la conservación, mostrando ejemplos de integración ambiental regional, visiones compartidas y sobre todo, comprometida con nuevas formas de enfrentar la gestión de las áreas protegidas y la conservación de la biodiversidad: la participación plena de los actores y comunidades locales en estos procesos. Un aporte importante que puede asegurar la permanencia a largo plazo de esos importantes espacios protegidos.

La tarea pendiente es la de fortalecer la gestión directa, contando para ello con marcos institucionales y normativos innovadores y con el acompañamiento de la comunidad internacional y los actores locales en este esfuerzo de gestión e integración ambiental regional.



Sistema de Áreas Protegidas	82	
Marco Reglamentario	84	
Enfoque de Gestión	78	
Recursos Disponibles	71	
Evaluación	75	

RETOS FUTUROS: APORTANDO A LA INTEGRACIÓN POR LA CONSERVACIÓN

Las respuestas de los países y el análisis formulado previamente evidencian muchas interrogantes y vacíos pendientes. Sin embargo, en materia de manejo de las áreas protegidas y conservación de la biodiversidad Centroamérica tiene un futuro prometedor y desafiante. Queda de manifiesto que el futuro desarrollo de la región está íntimamente ligado a estos temas, como una herencia que expresa la riqueza y productividad de los ecosistemas y ambientes de la región.

Los retos por tanto, están asociados a convertir lo planteado en este informe en instrumentos operativos para mejorar la gestión de los recursos naturales, de las áreas protegidas y para el aprovechamiento sostenible de las ofertas económicas de nuestra rica biodiversidad. Particularmente, la visión a futuro plantea:

De carácter general:

- a) Los compromisos, convenios y declaraciones regionales- derivados de procesos consensuados y negociados entre los países- establecen pautas y rutas que es necesario profundizar y llevar a la práctica. Entre ellas destacan la Declaración de Managua del Consejo de Ministros de Ambiente de Centroamérica, los compromisos expresados en el Congreso Mundial de Parques en Durban y el Plan Ambiental de la Región Centroamericana de la CCAD.

Por lo tanto uno de los retos más importantes se refiere al cumplimiento de los compromisos asumidos por los países en materia de conservación de biodiversidad y gestión de áreas protegidas. Esto significa cumplir con los compromisos globales, a través de la incorporación de mecanismos concretos en el ámbito nacional.

- b) Un segundo reto, no menos importante, es el compromiso de fortalecer las instancias regionales en materia de conservación de la biodiversidad y manejo de las áreas protegidas. De manera concreta ello significa asumir la puesta en marcha de la Estrategia Mesoamericana de Biodiversidad (EMB) como el instrumento regional que orienta la actuación en cada uno de los países; formular la política y estrategia del SICAP; incorporar como parte integral de la gestión institucional ambiental de los países la consolidación y fortalecimiento de la Iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) y la consolidación y redimensionamiento de las instancias técnicas de la CCAD que tienen que ver con el tema del informe, principalmente los Comités Técnicos de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Sistemas de Información Ambiental, fortaleciendo la sinergia entre ellos, como un mecanismo institucional para desarrollar el abordaje integral e integrado de la gestión de las áreas protegidas y la biodiversidad.
- c) Un tercer reto que significará un avance en la consolidación de las áreas protegidas se refiere a la generación de políticas y mecanismos regionales, claramente establecidos y asumidos por los países, para abordar desde una perspectiva regional, la gestión financiera y el establecimiento de relaciones transparentes y equitativas con la cooperación internacional y con los nuevos mercados de comercio justo.

De carácter temático.

Sistema de Áreas Protegidas

- Incorporar a los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas aquellos ecosistemas que no están debidamente representados.

- Generar mecanismos e instrumentos para que las áreas protegidas contribuyan efectivamente a la reducción de la pobreza y a la generación de empleos a las comunidades locales.

Marco Reglamentario

- Establecer mecanismos legales, financieros y fiscales para la incorporación de los beneficios y aportes de las áreas protegidas a los procesos de desarrollo nacionales y locales, que permitan la internalización de costos y distribución equitativa de beneficios.
- Fortalecer la implementación de los marcos regulatorios que faciliten la propuesta y gestión de áreas protegidas por actores locales.

Enfoque de la Gestión

- Establecer mecanismos e instrumentos para la planificación de la gestión de las áreas protegidas en un contexto socioeconómico y productivo de la región en la que están situadas.

Recursos disponibles

- Lograr el reconocimiento de la importancia de la conservación y manejo de las áreas protegidas a nivel de decisores políticos en los países.
- Impulsar que los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas contribuyan a una efectiva conservación de la biodiversidad *in situ*, por medio de la formulación y aprobación de programas de financiamiento y planes de negocios.

Evaluación

- Establecer en los planes de manejo de las áreas protegidas los mecanismos de evaluación y seguimiento que incorporen los principios de transparencia y rendición de cuentas, legitimidad, participación, desempeño y operatividad (gobernanza).
- Establecer los diversos mecanismos que incrementen la valoración, por parte de la sociedad, de los beneficios no materiales que contienen las áreas protegidas.

Cooperación Regional e Internacional

- Establecer instancias formales de comunicación y colaboración entre los países de la región para la gestión coordinada de las áreas protegidas transfronterizas.
- Fortalecer al Sistema de Información Ambiental Mesoamericano (SIAM) para que incluya un componente de evaluación de las áreas protegidas de la región.

BIBLIOGRAFÍA

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). 2003. Informes Nacionales de Áreas Protegidas de Panamá elaborado para el Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, marzo de 2003 en Managua, Nicaragua.

Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). 2003. Informes Nacionales de Áreas Protegidas de Honduras elaborado para el Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, marzo de 2003 en Managua, Nicaragua.

Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 2002. Biodiversidad en Mesoamérica: Informe Regional sobre el Cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB. 78p.

Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 2003. Estado del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP) Informe de Síntesis Regional. Elaborado para el Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, marzo de 2003 en Managua, Nicaragua.

Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 2003. Declaración de Managua, firmada por el Consejo de Ministros de la CCAD, en 2003, en ocasión del Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (PCMAP)

Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 1998. Estado del Ambiente y los Recursos Naturales en Centroamérica 1998.179p.

Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 2003. Informes Nacionales de Áreas Protegidas de Nicaragua elaborado para el Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, marzo de 2003 en Managua, Nicaragua.

Cuestionarios enviados por los Países de la Centroamérica al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), diciembre de 2002.

Dinerstein, E. et.al. 1995. A Conservation Assessment of the Terrestrial Ecoregions of Latin America and Caribbean. WWF-WB. Washington D.C. 120p.

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).2003. Informes Nacionales de Áreas Protegidas de Nicaragua elaborado para el Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, marzo de 2003 en Managua, Nicaragua.

Ministerio de Recursos Naturales, Ambiente, Comercio e Industria de Belice. 2003. Informes Nacionales de Áreas Protegidas de Belice elaborado para el Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, marzo de 2003 en Managua, Nicaragua.

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 2003. Informes Nacionales de Áreas Protegidas de El Salvador elaborado para el Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, marzo de 2003 en Managua, Nicaragua.

McCarthy, R.; Godoy, J.C.; Salas, A.; Cruz, J.C. 1997. Buscando Respuestas: Nuevos Arreglos para la Gestión de Áreas Protegidas y del Corredor Biológico en Centroamérica. Comisión Centroamérica de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Consejo Centroamérica de Áreas Protegidas (CCAP). Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP). Programa de Desarrollo Sostenible en Zonas de Frontera Agrícola en Centroamérica (PFA-CCAD-UE).

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 2003. Informes Nacionales de Áreas Protegidas de Costa Rica elaborado para el Primer Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, marzo de 2003 en Managua, Nicaragua.